

SOCIEDAD MEXICANA DE ESTUDIOS ELECTORALES A.C.

“XXVI Congreso Nacional de Estudios Electorales:

Balance de la reforma electoral 2014”

Mesa de trabajo IV: Reforma electoral 2014: experiencias Locales

(Mal) Interpretación legal: el papel del IEE Colima respecto a las candidaturas independientes y las cuotas de género en el proceso electoral de 2015

Lic. Edgar Martín Dueñas Cárdenas

emdc01@hotmail.com

Universidad de Colima

La reforma electoral de 2014 fue producto de una larga serie de demandas que se habían presentado no solo en el plano político, sino también desde la propia sociedad. Tanto las candidaturas ciudadanas como la paridad de género dentro de los diferentes órganos colegiados de gobierno (Congreso de la Unión, congresos locales y ayuntamientos), fueron algunos de esos resultados; sin embargo, la forma en cómo ha sido interpretada la normatividad por las autoridades, principalmente los órganos electorales a nivel local, en nuestro caso el Instituto Electoral del Estado de Colima, ha dejado más dudas que certezas en cuanto a la efectividad de la reforma, generando que en este primer proceso bajo la nueva reglamentación no solo no pudieran presentarse candidatos ciudadanos, sino que en el tema de la equidad de género, se hizo uso indiscriminado de las listas electorales ,tanto para el congreso local como para la mayoría de los ayuntamientos, con el argumento de cubrir la paridad de género en niveles de 50-50 de hombres y mujeres.

Palabras clave: Elecciones 2015, candidaturas independientes, cuotas de género, IEE Colima.

Introducción

El proceso electoral de 2015 representó la entrada en vigor de una de las mayores reformas políticas que se han presentado en México en las últimas décadas. Los cambios que se han establecido a la legislación electoral consideran un cuerpo considerable de cambios que se

han puesto en marcha con dicho proceso electoral, entre ellas destacan las candidaturas independientes y la paridad de género para todos los puestos de elección popular, vigilancia de dichas reformas también han recaído en los institutos electorales de los estados como garantes de los principios que del Instituto Nacional Electoral pero en la escala de lo subnacional.

En el presente trabajo se propone hacer un revisión de la nueva legislación, tanto a nivel federal como local, en lo que respecta a las candidaturas independientes y las cuotas de género, así como la forma en la que han sido llevadas a la práctica en el nivel subnacional, específicamente en el estado de Colima, para finalmente revisar cómo es que se han solucionado las controversias e impugnaciones por parte del árbitro electoral, el cual, a nuestro parecer, ha malinterpretado la legislación debido a presiones de grupos de interés tanto desde los partidos como de la sociedad civil, específicamente agrupaciones feministas.

Candidaturas independientes

Las candidaturas independientes es el primero de los grandes cambios que se han vertido en la legislación electoral, el tema ha tomado relevancia en los últimos 15 años debido al intento de obtener candidaturas al margen de los partidos por parte de personajes que han salido de la lógica de sus partidos, como Jorge Castañeda Gutman, o que simplemente tienen capacidad económica para incursionar en el mundo de la política, como Víctor González Torre, mejor conocido como el *Dr. Simi*.

Antecedentes de las candidaturas independientes

En la historia política del país, se han registrado periodos en los que las candidaturas independientes estaban bajo el amparo de la reglamentación vigente de la época. El primer periodo en que se registran candidaturas independientes es el que comprende entre 1917 y 1946, en el que las leyes vigentes eran la Ley Electoral de 1917, y un año más tarde su reforma, la Ley Electoral de 1918, periodo que a su vez podríamos dividir en dos: el que va de 1917 a 1929 en que existía una serie de partidos políticos muy focalizados, ya que los

partidos nacionales no tenían influencia en lo local, mientras que los partidos locales y regionales no influían a nivel nacional; y un segundo periodo entre 1929 y 1946, en el cual se da la creación y consolidación del partido de Estado.

Como lo menciona Paoli Bolio (1978), a pesar de que hubo intentos independientes por llegar a la presidencia de la república, los casos más cercanos fueron los de José Vasconcelos (en 1929), y Juan Andrew Almazán (candidato en 1940), es la fuerza del Partido Nacional Revolucionario y su evolución, Partido Revolucionario Mexicano, quienes bajo la lógica de la reglamentación vigente tenían el dominio de las casillas y del conteo de votos, avasallando cualquier posibilidad de triunfo que no fuera por medio del nuevo gran partido. A pesar de que el caso de Almazán se da por un quiebre al interior de las fuerzas del gran partido, su fuerza carismática no alcanza para lograr la victoria frente al candidato oficial, Manuel Ávila Camacho.

En por esta última razón que las disposiciones plasmadas en la Ley Electoral de 1946

“tienen un doble propósito: primero, propiciar el surgimiento de organizaciones más estructuradas o menos espontáneas que las que aparecieron en etapas anteriores; segundo, *controlar*, desde su nacimiento, cualquier organización política de carácter nacional, para no tener que aceptar organizaciones cuyas características y potencial se desconociera” (Paoli Bolio, 1978: 193).

Sin embargo, dicha legislación tenía

“la incongruencia de que [en] el artículo 66 se señala que ‘los partidos políticos o candidatos independientes pueden objetar el señalamiento de algún lugar para la instalación de casilla por motivos fundados...’. La posterior reforma de 21 de febrero de 1949 subsanaría dicho error” (González Oropeza, 2010: 46).

Tras permanecer relegadas de la legislación electoral, el tema vuelve a entrar en la escena política con la batalla legal que libra Jorge Castañeda Gutman, quien intenta ser candidato pero le es negada la posibilidad, por lo que recurre a los tribunales electorales en México, los

cuales ratifican la negativa, llevando el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falla contra éste, pero a su vez se hacen señalamientos al gobierno de México respecto a derechos políticos de los ciudadanos en la Observación General No. 25, emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Otro de los casos relevantes es el de Víctor González Torres, mejor conocido como el *Dr. Simi*, por ser dueño de la cadena de “Farmacias Similares”, quien al no ser postulado por un partido político desata una batalla legal tanto contra dicho partido, Alternativa Socialdemócrata y Campesina, como contra los candidatos de los demás partidos, al grado de presentarse en una sede alterna al debate oficial de candidatos a la presidencia de la república, haciendo intervenciones al mismo tiempo que la candidata Patricia Mercado (León, 2006), del partido mencionado.

En el nivel subnacional llama la atención algunos casos en los que la legislación ha mantenido vigentes la figura de candidato independiente o la ha aprobado para los procedimientos locales, tales como Yucatán, Zacatecas o Nayarit. En el primero dicha figura no desapareció a pesar de la promulgación de la Ley Electoral de 1946, y de hecho ha habido controversias que han llegado hasta los tribunales federales (González Oropeza, 2010); por su parte, tanto Zacatecas como Nayarit han sido estados que han adaptado su reglamentación de manera temprana en comparación con el caso nacional, que hasta 2014 con la aprobación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales instituye nuevamente las candidaturas independientes.

Las candidaturas independientes tras la reforma

Después de una larga batalla política al interior del Congreso de la Unión, tanto en las cámaras de Diputados como la de Senadores, es aprobada la mayor reforma político electoral de los últimos años, dentro de la cual se establecen una serie de disposiciones que han sido plasmadas en leyes y que han sido reclamo de diferentes sectores de la sociedad a través de movilizaciones sociales e incluso de alegatos y demandas en tribunales, como lo son las candidaturas independientes.

La nueva legislación parte de modificaciones sustanciales a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales se plasman en un documento general conocido como Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales (en adelante LGIPE), la cual viene a sustituir al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual servía de base para la organización de las cuestiones electorales en el país.

El primero de los elementos a destacar la homologación de la teoría con la práctica que señala el artículo 35, el cual establece que todo mexicano y mexicana tienen derecho a votar y ser votados, lo que se refleja en el artículo 7º, numeral 3 de la LGIPE, el cual señala que

“Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley”.

Para el ámbito federal, dicha ley en su artículo 360, numeral 1, establece que

“La organización y desarrollo de la elección de candidaturas independientes será responsabilidad de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto en el ámbito central; en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan”

Mientras que para el ámbito estatal, la LGIPE refiere como fuente el artículo 116, en su fracción IV indica que “De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán...”, y específicamente en su inciso P que “Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución”

Para el caso de Presidente de la República, Diputados Federales y Senadores, el porcentaje de apoyo ciudadano que los aspirantes a candidatos independientes es de 1% del padrón electoral vigente, con las especificidades que cada uno de los cargos solicite, mientras que para los casos estatales, en concordancia con los artículos arriba señalados, será facultad de los gobiernos de los estados que se establezcan dichos requerimientos en las constituciones locales y los códigos electorales respectivos.

El caso de Colima

Después de haberse aprobado dichas candidaturas a nivel nacional, y atendiendo a la nueva legislación que entra en vigor con la promulgación de la LGIPE en 2014, los estados estaban obligados a adecuar sus leyes, códigos y reglamentos para homologarlos con las leyes nacionales. Es el 14 de junio de 2014 cuando se realiza la adecuación de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima al ser publicada en el Diario Oficial “El Estado de Colima”, así como del Código Electoral de Colima, con lo que se acatan las disposiciones federales en lo local.

La Constitución de Colima señala en su artículo 86 BIS, fracción II BIS, establece que

“Los ciudadanos colimenses podrán contender en los procesos electorales para todos los cargos(sic) de elección popular, de manera independiente de los partidos políticos, siempre que satisfagan los requisitos, condiciones y términos que establezca la ley.

Los ciudadanos que participen como candidatos independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público y privado, en la forma y términos que establezca la ley.

La ley establecerá las reglas y límites a que se sujetará el financiamiento de las actividades de los ciudadanos que obtengan su registro como candidatos independientes dentro de un proceso electoral, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado; asimismo, regulará los procedimientos para control y vigilancia de todos los recursos con los que cuenten, incluyendo los recursos privados que se hubiesen utilizado para financiar las actividades tendientes a obtener dicho registro.

Los candidatos independientes registrados, en ningún caso, podrán participar en la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional”

Asimismo, dicho artículo faculta al Instituto Electoral del Estado como la autoridad encargada de los procesos electorales antes, durante, y después de la jornada electoral, así como en años no electorales, por lo que será el IEE el encargado de establecer las pautas para que los ciudadanos puedan aspirar a convertirse en candidatos independientes. Dichas pautas se establecen en el Acuerdo 18 de dicho Instituto.

La Constitución de Colima reserva además el libro VII para las candidaturas independientes. Específicamente, el artículo 345, fracción II, señala que

“De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente aquel que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, haya obtenido la mayoría de las manifestaciones de apoyo válidas, siempre y cuando dichos apoyos sea igual o mayor del 3% del Padrón Electoral de la demarcación territorial de la elección que corresponda”

En el caso del estado de Colima, se ha establecido el 3% del padrón electoral aprobado por el Instituto previo al inicio del proceso electoral, cuestión que contraviene otras formas de organización política para participación en elecciones, como es el caso de las asociaciones políticas y los partidos políticos de reciente creación, los cuales el porcentaje de firmas recabadas no llega al 1% de dicho padrón.

El Código Electoral establece el cual se reproduce a continuación:

“Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a candidato independiente deberán comparecer personalmente en los lugares destinados para tal efecto, con su CREDENCIAL, conforme a las siguientes reglas:

I. Las manifestaciones de respaldo se requisitarán en el momento de su entrega en el formato correspondiente que para tal efecto apruebe el CONSEJO GENERAL y contendrán la firma o huella del ciudadano directamente interesado;

II. La recepción de las manifestaciones se hará ante la presencia de los funcionarios electorales que al efecto se designen y de los representantes que, en su caso, designen los PARTIDOS POLÍTICOS y que los propios aspirantes decidan acreditar;

III. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a GOBERNADOR serán presentadas en las(sic) lugares señalados en la convocatoria y que correspondan al domicilio del ciudadano que otorga el respaldo;

IV. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a Diputados serán presentadas exclusivamente por ciudadanos con domicilio en ese ámbito territorial, y

V. Las manifestaciones de apoyo para aspirantes a los Ayuntamientos serán presentadas exclusivamente por los ciudadanos con domicilio en el municipio de que se trate.

En la Convocatoria y el Reglamento se establecerán lineamientos para la adecuada recepción de las manifestaciones de respaldo, incluyendo, en su caso, la instalación de módulos que acuerde, en su caso, el CONSEJO GENERAL.

En base al artículo citado el Reglamento de Candidaturas complementa la legislación al señalar en su artículo 24 que “Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a candidato independiente deberán comparecer personalmente en los lugares destinados para tal efecto, con su CREDENCIAL...”. Dicha reglamentación ha causado molestia por parte de los aspirantes a la candidatura independiente, tal es el caso del Lic. Gabriel Salgado Aguilar, quien señala que

“...te exige la ley en Colima, que tú, esos apoyadores tienen que ir a comparecer ante un grupo de 10 personas, que son un representantes de cada partido estatal...para que ratifiquen ahí su apoyo, y también tienen que comparecer ante una comisión nombrada por el Consejo Electoral del Estado, para que ratifiquen ahí y se verifique el apoyo” (G. Salgado Aguilar, entrevista personal, 29 de junio de 2015)

Lo anterior, debido a que las cifras que debían obtener los aspirantes alcanzaban las siguientes cifras¹:

¹ Se presentan solamente las cifras de los cargos a los que se registraron solicitudes para obtener la candidatura ciudadana.

- Gobernador: 15,626
- Presidente municipal (Manzanillo): 3,941
- Diputado local (Distrito I): 1,931
- Diputado local (Distrito XI): 1,039
- Diputado local (Distrito XIII): 1,007
- Diputado local (Distrito XIV): 1087

Y los resultados de las muestras de apoyo que lograron los diferentes aspirantes a candidatos independientes que fueron reconocidos por el Instituto Electoral fueron:

“En el caso de los diputados, por el distrito 1, Erick Anzures obtuvo cero; el aspirante por el distrito 7 declinó; por el distrito 11, Enrique Espinoza Villaseñor, 151, y con una segunda solicitud, Javier Antonio Delgado Valenzuela, 407; el aspirante al distrito 13, Óscar Blas Eduardo de la Torre, 412; por el distrito 14, y Gustavo Rentería González, 226. Asimismo, la planilla de ayuntamiento en Manzanillo, encabezada por Carlos Leonel Gómez Quiñonez, mil 571” (Flores, 2015)

En el caso de los contendientes a gobernador (Gabriel Salgado Aguilar y Carlos Barbazán Martínez), obtuvieron 0 y 12 muestras aprobadas, respectivamente.

En el pasado proceso electoral, las candidaturas independientes no se han logrado en Colima. Tanto los porcentajes requeridos como las formas de manifestar el respaldo ciudadano se han vuelto las principales trabas, que si bien hay casos en donde se solicita hasta un 5% del padrón electoral, el hecho de que los ciudadanos que respaldan deben acudir a los lugares señalados tanto por el Código Electoral como por el Reglamento de Candidaturas ha sido un freno, ya que la sociedad no está segura de asistir frente a representantes de los partidos.

La equidad de género

Las mujeres son parte importante en la sociedad a pesar de una larga tradición en donde el hombre se ha apoderado de los espacios públicos. Esta lucha por obtener los derechos que

hoy en día se consideran naturales y que igualan a hombres y mujeres se ha desarrollado desde hace siglos. A nivel internacional, por ejemplo, Francia fue el primer país en introducir las cuotas de género, y dos décadas después, una lista de países se le han incorporado: “Bélgica (2002) y España (2007) en Europa; Bolivia (2009), Costa Rica (2009), Ecuador (2008), Honduras (2012), México (2014) y Nicaragua (2010)² en América Latina y Túnez (2011), Kenia (2010) y Senegal (2010) en África” (Albaine, 2015: 147).

En México, a pesar de que ha habido grandes mujeres que han participado en política, como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y muchas más, la primera gran victoria del sector femenino en la política se dio en 1953 con su reconocimiento como ciudadanas en facultad de ejercer el voto. A partir de ese momento comienza poco a poco su incursión, primero al ganar presidencias municipales para después destacar en la escena nacional con la llegada de la Mtra. Griselda Álvarez Ponce de León como gobernadora de Colima en 1979, a pesar de ello, ha habido una baja participación de las mujeres para cargos de elección popular, no habiendo en la historia más de 10 gobernadoras y con un porcentaje no mayor al 5% de presidencias municipales ocupadas por mujeres (Medina, 2010).

Como menciona Blanca Peña, “la adopción de un sistema de cuota consiste en establecer una reserva rígida para el grupo social que se busca favorecer, siempre y cuando, se sujete a las siguientes condiciones: a) aplique sólo en casos muy particulares de discriminación (sexual, racial, étnica, religiosa, minusvalía física, entre otras) y b) se produzcan en contextos de ‘especial escasez’ (listas electorales, puestos de trabajo). Consecuencia de lo anterior, un sistema de cuota no deja de ser una discriminación directa, unilateral y por ello ha de ser admitida” (2014:34).

Se han realizado grandes esfuerzo para que las cuotas de género vayan siendo parte de la dinámica natural de la política en México, no como una imposición, como una “discriminación directa”. Sin embargo los partidos han encontrado formas para burlar las legislaciones, tal fue el caso de “Las juanitas”, candidatas que una vez llegando al puesto de elección popular, renuncian para dejar como titulares a sus suplentes varones; o el caso de

los distritos históricamente perdedores², es decir, que los partidos proponen a un género en distritos donde se tiene registrado que un partido no ha obtenido victorias.

En las últimas décadas se han implementado sistemas de cuotas para cargos de elección popular y para representación proporcional en los partidos, la última de éstas en 2014, que establece una relación 60-40 para los géneros dentro de dichas candidaturas, así como candados especiales (que tanto candidato como suplente sean del mismo género, para evitar nuevas “juanitas”), y que se plasman en la LGIPE y la legislación electoral a nivel nacional y local.

El caso Colima. Integración del IEE

La conformación de los Organos Públicos Locales Electorales, a cargo del Instituto Nacional Electoral (en adelante INE), también se ha regido por incluir la paridad de género en la designación de los funcionarios que habrán de constituirlos, sin embargo, para el caso de Colima, se presentó una serie de movimientos que afectaron dicha conformación. Durante el proceso, Ricardo Caro González, quien había resultado consejero electo, renunció al cargo, por lo que el INE nombró a Adriana Ruíz Visfocri, quien tras un juicio promovido por exparticipantes al cargo (Negrete, 2015), fue removida, quedando finalmente la actual consejera Verónica Alejandra González Cárdenas.

Llama la atención que el juicio promovido por los inconformes tenía como base el hecho de que había una sobrerrepresentación del género femenino en el Consejo General del IEE Colima, sin embargo, el propio INE instaló en el cargo también a una mujer, lo que no generó un nuevo juicio de los primeros promoventes, dejando entrever que también había cierta revancha política por parte de los partidos políticos, en específico, del PRI. Actualmente el Consejo General del IEE se conforma de 5 mujeres (Presidenta y 4 consejeras), y 3 hombres (Secretario y 2 consejeros).

² El concepto “distritos históricamente perdedores” se rescata del trabajo de la Dra. Esperanza Palma presentado en el Seminario Internacional “La calidad de las elecciones en contextos de procesos de reforma política reciente”, llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, los días 29 y 30 de abril de 2015.

La asignación de candidaturas

Como parte de las atribuciones del Instituto Electoral del Estado de Colima, el 8 de abril de 2015 en sesión extraordinaria del Consejo General se aprobó la integración de las listas plurinominales de los partidos para la elección del 6 de junio de dicho año, lo cual se asienta en el acta respectiva. Dentro de las consideraciones del proyecto, se establece en su considerando 8º lo relativo a la paridad de género; sin embargo, esto es solamente en el aspecto del cuidado de las proporciones de candidaturas para ambos géneros, por lo que el acomodo es un tema que no establece la legislación.

El resultado del proyecto permitió que los partidos Verde Ecologista, Humanista, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Encuentro Social, ubicaran en su primera posición a un hombre, mientras que el resto (Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y MORENA), ubicaran a una mujer en la primera posición.

Tras la elección del 6 de junio, de los 15 distritos uninominales en que se divide la geografía electoral del estado de Colima, 11 fueron ganados por hombres, mientras que solo 5 fueron para candidatas, lo que genera una proporción del 69% para hombres y solo 31% para mujeres. En el presente caso, la legislación se empeña en que las candidaturas cumplan con los criterios de paridad, dejando a la suerte las votaciones, ya que es imposible determinar la cantidad exacta de cargos ganados por cada género.

El problema radica en que si hay una mayoría de hombres que han ganado una elección, ¿cómo obtener la paridad de género en los cuerpos legislativos? Al parecer la respuesta se encuentra en las listas plurinominales y su acomodo, el cual, desde el momento de su aprobación, tendrían que haberse hecho las observaciones y no permitir que los partidos postularan en primera posición a hombres, sino que se modificaran las listas de origen para salvaguardar la paridad y evitar caer en posibles irregularidades, como sucedió tras la elección.

Las presiones desde la sociedad civil

Una vez conocidos y aprobados los resultados de la elección del 6 de junio para los diferentes puestos de elección popular por mayoría relativa, se realizó el 28 de junio la sesión por parte del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Colima para determinar el reparto de posiciones plurinominales en el Congreso del Estado. En esta se presentó una propuesta alterna en la que se apelaba al respeto de la paridad de género (Solís Espinoza, 2010), por lo que se modificaban las listas de prelación aprobadas por el propio Instituto Electoral al inicio del proceso electoral correspondiente.

La propuesta presentada proponía que para respetar la paridad de género, se hiciera un cambio en las listas plurinominales de los partidos en los casos en que el primer lugar de la lista fuera para el sexo masculino, afectando a candidatos de seis partidos (PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PT, PVEM y Panal). La propuesta fue aprobada por 5 votos a favor, 1 en contra y una abstención, mientras que los partidos afectados anunciaron que apelarían la decisión, tanto de la repartición de plurinominales como de los movimientos en búsqueda del cumplimiento de la paridad de género.

Al día siguiente, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, principalmente feministas, se pronunciaron por el respeto de la histórica decisión en el IEE (Cervantes, 2010), entre las que destacan el Consejo Ciudadano y Parlamento 100 por Colima, la Asociación Colimense de Universitarias, así como la Fundación IUS Género; asimismo, días antes de la sesión se vino vertiendo presión por parte de mujeres pertenecientes a estas agrupaciones, principalmente de Patricia Sánchez Espinosa, editorialista y reportera de Diario de Colima, principal periódico de circulación estatal, del cual su padre es dueño y director.

Las impugnaciones no tuvieron eco en el Tribunal Electoral del Estado, que determinó que tanto las controversias presentadas contra repartición de plurinominales y la paridad de

género no eran procedentes, generando que la impugnación llegara hasta el pleno de la Sala Regional Toluca, donde se resuelven las controversias a nivel federal del estado de Colima.

Conclusiones

La reforma política de 2014 apenas ha entrado en vigor y no hemos visto gran parte de su potencial, sin embargo, en esta elección intermedia ha habido aprendizajes importantes con respecto a las candidaturas independientes y las cuotas de género, no solamente para el caso nacional, sino también en el nivel subnacional, que empieza a asimilar, y en varios casos a restringir, las posibilidades que la reforma ha traído consigo.

Las candidaturas independientes han llegado con paso firme, en el caso nacional la victoria de un diputado federal independiente no refleja gran cambio, sin embargo en lo subnacional se consiguieron una gubernatura (de uno de los estados más importantes, como lo es Nuevo León), así como presidencias municipales y diputaciones locales. El balance parece alentador, sin embargo los partidos también han ejercido presión y puesto candados para que la situación no les complique la partidocracia en que han convertido el régimen político, teniendo como ejemplos Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas o Puebla, donde los candados han generado malestar, aunado a la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de intervenir en los casos locales contra las llamadas *leyes antibronco*.

En el caso de Colima, la legislación, antes de tener conocerse el concepto, nació siendo una *ley antibronco* por el nivel de las exigencias que se solicitan al ciudadano para ser candidato independiente. Como lo han expresado los solicitantes a dicha candidatura, una barrera importante es el miedo de la población a externar su apoyo a candidatos independientes si en el camino deben comparecer ante representantes de los partidos, lo que creen podría repercutir en la expulsión, como beneficiarios, de programas sociales impulsados por los principales partidos y que han servido como forma de mantenimiento de clientelas a nivel nacional y local.

En el caso de las cuotas de género se han dado pasos importantes en la legislación, tratando de que la paridad de género se acerque a los porcentajes del 50-50, sin embargo los partidos han encontrado formas de resistirse a cumplir a cabalidad la ley, y en el mejor de los casos a convertirlo en algo común del ejercicio político en nuestro país.

A lo anterior habrá que sumarle el hecho de que se presenten casos como el de la asignación de plurinominales por parte del Instituto Electoral del Estado de Colima, donde mediante un proyecto alterno se violan los derechos políticos de los candidatos que se ubicaban en la primera posición plurinomial y fueron dejados de lado en busca de la paridad de género, ya que dicho procedimiento tendría que haberse realizado desde la aprobación de las listas, y no cuando sabiéndose resultados, se “manosean” dichas listas.

Hasta el momento de conclusión del presente trabajo no se ha dado un resolutivo por parte del Tribunal Federal Electoral, pero un caso similar al de Colima, en este caso Morelos, ha sido corregido por dicho tribunal y ha devuelto los cargos a quienes originalmente se habían propuesto en los documentos aprobados por el Instituto Electoral de dicho estado para la elección.

Aún falta corregir muchos aspectos, la elección de 2018 permitirá conocer nuevas dinámicas que por el momento nos resultan ajenas, tal es el caso de las reelecciones para ciertos cargos de elección popular, en el nivel subnacional las interpretaciones de la reforma varían, y claro ejemplo de ello es que en ciertos estados se permitirá la reelección de diputados hasta por cuatro periodos, mientras que en otros estados solo se permitirá por un periodo más.

Bibliografía

- LEÓN Zaragoza, G. 2006. Asegura el *doctor Simi* que los candidatos “me tuvieron miedo”. *La Jornada*. Recuperado de www.jornada.unam.mx/2006/06/07/index.php?section=politica&article=013n2pol al 29/06/2015.
- FLORES, J. C. 2015. Desechan candidaturas independientes; hubo quien no tuvo ni un voto. *Colimanoticias*. Recuperado de <http://colimanoticias.com/desechan-candidaturas-independientes-hubo-quien-no-tuvo-ni-un-voto/> al 30/06/2015.
- PEÑA Molina, B. 2014. “La paridad de género: eje de la Reforma Político-Electoral en México”. *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, núm. 14, México, pp. 31-74.
- PAOLI Bolio, F. 1978. “Legislación electoral y proceso político, 1917-1978”. *Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, tomo I, núm. 10, julio, pp. 165-218.
- GONZÁLEZ Oropeza, M. 2010. “Candidaturas Independientes”. *Sufragio. Revista especializada en Derecho Electoral*, 3ª época, núm. 4, diciembre 2009-mayo 2010, México, pp. 43-58.
- SOLÍS Espinoza, M. 2010. Hace IEE historia en Colima al aprobar paridad de género. *Diario de Colima*. Recuperado de <http://www.diariodecolima.com/2015/06/29/hace-iee-historia-en-colima-al-aprobar-paridad-de-genero/> al 10/09/2015.
- MEDINA Espino, A. 2010. *La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad*. México: Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género-H. Congreso de la Unión. Recuperado de [http://www.diputados.gob.mx/documentos/Comite CEAMEG/Libro Part Pol.pdf](http://www.diputados.gob.mx/documentos/Comite_CEAMEG/Libro_Part_Pol.pdf) al 11/09/2015.
- NEGRETE, J. R. 2014. María Elena Adriana Ruíz Visfocri, deja de ser Consejera Electoral, por orden de la Sala Superior. *Ipuntocom noticias*. Recuperado de <http://ipuntocom.mx/maria-elena-adriana-ruiz-visfocri-deja-de-ser-consejera-electoral-por-orden-de-la-sala-superior/> al 11/09/2015.

Leyes y Reglamentos

- Código Electoral del Estado de Colima
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
- Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado de Colima